



Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla D.E.I.P., trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicado	08001-3333-006-2019-00128-00
Medio de control	Reparación Directa
Demandante	Carmelo Joaquin Marengo Peña
Demandado	Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Barranquilla – Rama Judicial
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

I.- PRONUNCIAMIENTO.

Procede el despacho a dictar sentencia dentro la demanda de acción de reparación directa interpuesta por Carmelo Joaquín Marengo Peña contra la Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Rama Judicial, de conformidad con los artículos 181 y 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

II.- ANTECEDENTES.

2.1 Pretensiones:

- Se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación –Rama Judicial por los perjuicios causados al señor Carmelo Joaquín Marengo Peña, como consecuencia del error judicial cometido por el Juez Segundo Civil Municipal de Soledad, en el proceso ejecutivo singular con radicación No. 2017-00402, a raíz de la omisión grosera y antijurídica de normas procesales
- Se ordene el pago de la suma de \$65.235.455,54, cantidad entregada al ejecutante en el proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad, con radicación No. 2017-00402, contra el señor Carmelo Joaquín Marengo Peña.
- Se ordene el reconocimiento y pago de interés de las sumas entregadas al ejecutante en el proceso ejecutivo con radicación N°2017-00402, que debió percibir el demandante desde el 2 de febrero de 2018 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.
- Que se condene a la demandada al pago de las agencias en derecho y se le dé aplicación a los artículos 192, 193 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. 2. Hechos.

El despacho se permite sintetizarlos así:

Los días 26 de diciembre de 2017 y 30 de enero de 2018, el señor Carmelo Joaquín Marengo Peña recibió del Banco Agrario de Colombia, sucursal de Guaranda, Sucre, información verbal de unas notas debito a la cuenta de ahorro N° 463242003365, a su nombre, por valor de \$65.130.431,54 y de \$105.024,00, respectivamente, por un supuesto embargo decretado por un Juzgado Civil Municipal, sin indicar la ciudad sede del mismo.

-. El día 2 de febrero de 2018 el señor Marengo constató en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad, con el libro radicador, la existencia de la anotación de un proceso ejecutivo singular de Nelson Cortina Álvarez (apoderado Santos Acuña Ordoñez), contra Carmelo Joaquín Marengo Díaz (sic), con radicación No. 2017-00402 de fecha 18 de diciembre de 2017. Donde le informaron que el proceso había terminado y le entregaron copia informal de la demanda, sus anexos y piezas procesales del expediente:

La cronología de las piezas procesales, son las siguientes:

Presentación de la demanda: 14 de diciembre de 2017

Radicación de la demanda: 18 de diciembre de 2017

Decreto de embargo y retención de dinero: 18 de diciembre de 2017

Auto Libra mandamiento de pago: 18 de diciembre de 2017

Notificación por estado del auto de embargo: 19 de diciembre de 2017

Notificación por estado mandamiento de pago: 19 de diciembre de 2017

Se libra oficio No. 2058 (de embargo): 19 de diciembre de 2017

Se recibe fotocopia del guía contado 046000738525 de ENVÍA Mensajería y Mercancía el 15 de enero de 2018

Se decreta terminación del proceso: 17 de enero de 2018

Notificación por estado de la terminación del proceso: 18 de enero de 2017 (sic).

Comunicación de la orden de pago: 18 de enero de 2018.

El Juez del conocimiento, en auto del 18 de diciembre de 2017, considerando que “... se encuentran reunidos los requisitos exigidos...”, resuelve “*Librar mandamiento de pago por vía ejecutiva a favor de NELSON ANTONIO CORTINA ÁLVAREZ en contra de CARMELO JOAQUÍN MARENGO PEÑA; por la cantidad de NOVENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/L (\$90.000.000.00); por concepto de capital insoluto contenido en el PAGARE No. 0088, anexo a la demanda...*”

Manifiesta que, el Juez Segundo Civil Municipal de Soledad, impidió el emplazamiento del demandado, que privó al señor Carmelo Joaquín Marengo Peña, de la oportunidad de

conocer la existencia del proceso, de poder concurrir al mismo y proponer excepciones y presentar alegatos en su defensa, tales como, la falta de competencia por factor territorial, pues nunca ha vivido en la carrera 11C No. 46-16 barrio Soledad 2000, de Soledad Atlántico, y la falsedad material del título de recaudo.

- El Juez Segundo Civil Municipal de Soledad decretó la terminación del proceso sin haber dictado la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución ni haber agotado el trámite de la presentación y aprobación de la liquidación del crédito, yerro judicial que tuvo lugar a partir de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso.

- El Juez Segundo Civil Municipal de Soledad ordenó la entrega al ejecutante del dinero embargado de la cuenta de ahorro N° 463242003365, del Banco Agrario de Colombia, sin haber aprobado la liquidación del crédito, como lo dispone el artículo 447 del Código General del Proceso.

Las providencias del 17 y 18 de enero de 2018, que decretaron la terminación del proceso y la entrega del dinero al ejecutante, respectivamente, se encuentran ejecutoriadas, y el señor Carmelo Joaquín Marengo Peña, no tuvo la oportunidad procesal para impugnarlas por la actitud omisa del Juez del conocimiento, que no se entiende como simple posibilidad de ser parte de un proceso judicial, si no que constituyó la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia.

2.2 Contestación

2.2.1 Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Barranquilla – Rama Judicial

El apoderado de la parte demandada se opuso a todas las declaraciones y condenas solicitadas, toda vez que, no existe razón de hecho o derecho sobre el cual el Estado deba resarcir daño alguno por que carece de fundamento jurídico.

Señala que el error jurisdiccional el artículo 66 de la ley 270 de 1996, lo define como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional en su carácter como tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la Ley.

Aduce que de las pruebas obrante el daño no se encuentra probado, por lo que no es posible que se afirme que tales providencias contengan un error jurisdiccional en virtud al desarrollo del principio de independencia y autonomía de los jueces en su interpretación

que se hace de manera razonada y coherente y con solidez argumentativa que no configura el error jurisdiccional. Solicita se denieguen las pretensiones

Presenta como excepción caducidad de la acción, culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero.

2.3 Actuación Procesal.

La demanda fue presentada el 29 de mayo de 2019 ante la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de esta ciudad, siendo asignada por reparto a este estrado judicial.

Mediante proveído de fecha 11 de julio de 2019 fue admitida, ordenando las notificaciones y traslados. Notificada en debida forma, la parte demandada presentó en tiempo contestación con la proposición de excepciones de fondo. A las cuales se les dio traslado mediante fijación en lista el 16 de febrero de 2021.

Surtido el traslado de las excepciones propuestas, con auto calendado 8 de marzo de 2021, fue señalada fecha y hora para el desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del C.P.A.C.A. Celebrándose¹ el día 28 de abril de 2021, en la cual se consideró innecesaria la audiencia de pruebas, toda vez que las pruebas pendientes por recaudar eran netamente documentales, las cuales una vez recaudadas se les daría traslado por secretaría y dispondría por auto lo concerniente a la audiencia de alegaciones y juzgamiento.

Una vez recibida las pruebas documentales, mediante fijación en lista el 11 de noviembre de 2021, se le dio traslado por secretaría, por lo que, con auto de fecha 18 de noviembre de 2021 se ordenó la presentación de alegatos.

2.4 Alegaciones

2.4.1 Parte Demandante

En sus alegaciones reiteró lo expuesto en el escrito de la demanda. Aduciendo que la conducta del Juez Segundo Civil Municipal de Soledad, en el curso del proceso ejecutivo, fue subjetivo y arbitrario. Violando con ello el debido proceso. En razón a ello el actor no pudo impugnar la cuestionable decisión.

¹ Acta de 21 de febrero de 2019 – folio 274-276

Concluyó que, las pruebas que obran en el proceso demuestran plenamente que “*existe una desfasada subsunción de la realidad fáctica en la hipótesis normativa*”. El daño antijurídico causado al demandante se materializa a través de la providencia del 17 de enero de 2018, y la comunicación de la orden de pago fechada 18 de enero de 2018 entregada al ejecutante; que fue expedida y emitida, respectivamente, por el Juez Segundo Civil Municipal de Soledad, con violación del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Está probado también que existe una relación de causalidad entre la actuación indebida de dicho Juez y la entrega al ejecutante de los \$65.235.455,54, generando una responsabilidad patrimonial del Estado.

Solicita no declarar probada las excepciones de fondo propuestas y conceder las pretensiones.

2.5.2. Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Barranquilla – Rama Judicial

No presentó alegaciones en el presente asunto.

2.6 Concepto del Ministerio Público

No rindió concepto

III.- CONTROL DE LEGALIDAD

No advirtiéndose ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar la sentencia correspondiente.

IV.- CONSIDERACIONES

4.1 Problema Jurídico.

Se centra en determinar si la Nación-Rama Judicial es administrativa y patrimonialmente responsable por el daño reclamado por el señor Carmelo Joaquín Marengo Peña con ocasión del presunto error judicial cometido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad, en el proceso ejecutivo singular con radicación N° 2017-00402, al proferir el auto calendarado 17 de enero de 2018, en el cual se ordenó la terminación del proceso y la entrega de la suma \$65.235.455,54, que habían sido embargado de las cuentas del demandado.

4.2 Tesis

Se sostendrá que, la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se predicen de una determinada providencia y, por tanto, no demostró que el auto analizado fuera contrario a derecho, lo que fuerza a denegar las pretensiones de la demanda.

4.3.- Marco Normativo y Jurisprudencial

4.3.1 Clausula General de la Responsabilidad Extracontractual del Estado

La Responsabilidad Patrimonial del Estado se encuentra prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, cuyo tenor reza:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

De conformidad con el precepto constitucional transcrito tenemos que, siempre que se infiera un daño antijurídico imputable por acción u omisión de las autoridades públicas, el Estado deberá responder patrimonialmente, pues la persona afectada tiene la posibilidad que sean reparados los perjuicios padecidos y que no tenía la obligación soportar, a través de la acción de reparación directa contemplada en el artículo 140 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En ese sentido, el Estado es patrimonialmente responsable cuando el daño antijurídico reclamado le sea imputado por la acción u omisión de sus agentes, sobre este particular el Consejo de Estado ha sostenido:

“A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”². Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”

Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el

² Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932

deber jurídico de soportar”³. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.

En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”⁴; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”⁵.

Al respecto, en recientes pronunciamientos, esta Sección ha reiterado que:

“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”⁶ (subrayado fuera de texto).

En ese sentido, los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración, en la cual debe acreditarse la relación entre la conducta y el daño y la razón por la cual las consecuencias de esa afectación deben ser asumidas por el Estado (...). En lo tocante a la imputación, corresponde determinar si el daño puede ser imputado a las entidades demandadas o una de ellas, o si, por el contrario, es atribuible al hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

4.3.2 Responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional

El consejo de Estado respecto al error jurisdiccional ha señalado⁷:

Como punto de partida para decidir el recurso que se encuentra a consideración de la Sala, se precisa que el error jurisdiccional como título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado, regulado en la Ley 270 de 1996⁸, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos⁹ a través del ejercicio abiertamente

³ Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Rad. 17042

⁴ Ibídem, Sentencia 15932 del 30 de agosto de 2007.

⁵ Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de julio 12 de 1993; Exp. 7622

⁶ Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569

⁷ **CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ**, Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021),

⁸ Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996.

⁹ Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. *Lecciones de derecho procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013*].

De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas

irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional; de ahí que el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiere verificar si la acción u omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio de los mencionados derechos.

En concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, el error jurisdiccional, como fuente de responsabilidad estatal, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, que en su carácter de tal y en el curso de un proceso, profiere una providencia contraria a la ley, esto último, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de esta (error de derecho)”¹⁰.

Bajo tales premisas, la jurisprudencia ha sido enfática en considerar que el error de hecho o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme, para que se configure una lesión de los derechos ya comentados, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión que, en todo caso, debe ser personal y cierta¹¹.

Lo anterior, implica, además, que la tarea del juez de la responsabilidad, no deba traducirse en la reproducción de la labor del juez de instancia, pues su labor debe limitarse a la verificación de la existencia de los yerros que se endilgan a la luz de la motivación jurídica y probatoria del fallo que cuestiona, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada¹².

Además de lo anterior, debe indicarse que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional es de carácter subjetivo, lo cual, impone a la parte demandante demostrar el yerro; y, con este, acreditar el daño y su imputación al Estado, ante lo cual la parte demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional o la presencia de una causa extraña que rompa la imputación del daño que se le pretende atestar.

En este orden de ideas, la demostración de la existencia de un error judicial, se supedita, entre otros, al cumplimiento de las siguientes exigencias específicas: i) el agotamiento de los medios procesales de revisión y corrección judicial de las determinaciones que se adopte al interior del proceso; ii) la firmeza de la providencia contentiva del error, de manera que no pueda revertirse por las vías judiciales ordinarias; y, iii) la manifestación del yerro, su naturaleza y la afectación que causa, sin que sea necesario invocarlo directamente, sino

procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]

Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas convencionales – artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como un derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, algunas garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión *pro actione*.

Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo como un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio. [Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

¹¹ “c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. || d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error cometido (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 22.322.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

que el juez de instancia pueda interpretarlo de una valoración integral de la demanda, siempre y cuando aparezca explicado de manera clara, precisa y esté debidamente argumentado¹³.

5.- Caso Concreto

5.1.- Hechos Probados

1.- En el juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad se surtió el proceso ejecutivo seguido por Nelson Antonio Cortina Álvarez contra el hoy demandante Carmelo Marengo Peña, con radicado 08758-40-03-002-2017-00402-00¹⁴.

2.- En el proceso¹⁵ se surtieron las siguientes etapas:

-. El 14 de diciembre de 2017 el señor Nelson Antonio Cortina Álvarez presentó demanda ejecutiva contra el señor Carmelo Marengo Peña, pretendiendo el pago de la obligación contenida en el pagaré No. 0088 de fecha 29 de enero de 2015 por la suma de \$90.000.000.00, más los intereses de mora. Se aportó como título ejecutivo, Pagaré No. 0088 de 29 de enero de 2015 por la suma de \$90.000.000.00 suscrita por Carmelo Peña y carta de instrucción. Así como el escrito de medida cautelar solicitando el embargo y retención de dineros depositados en las cuentas de las entidades financieras.

-. El 18 de diciembre de 2017 se libró mandamiento de pago por la suma de \$90.000.000.00 más los intereses y se decretó medida cautelar, mediante autos de esa data¹⁶.

-. Con guía 046000738525 se envió el 6 de enero de 2018 documento al señor Carmelo Marengo en la carrera 11C No. 46-16 Soledad 2000, la cual fue allegada con memorial el 15 de enero de 2018.¹⁷

-. El 15 de enero de 2018 se presentó memorial suscrito por las partes ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad, en el cual se manifiesta un acuerdo en el cual se acepta el valor embargado por la suma Setenta y Cinco Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos \$65.235.455.540, como pago total de la obligación y se solicitó la terminación del proceso, con anexo de presentación personal de

¹³ Para la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, los yerros constitucionales deben acreditar ser “claros, ciertos, específicos y suficientes”, lo cual resulta más riguroso que en sede de reparación directa, a pesar de ser una “acción constitucional”. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: anuel José Cepeda Espinosa.

¹⁴ Copias de expedientes anexos a la demanda.

¹⁵ Copias auténticas del expediente con radicado 08758-40-03-002-2017-00402-00

¹⁶ Auto que libra mandamiento de pago y decreta embargo

¹⁷ Escrito y guía radicado 15 de enero de 2018.

la Notaría Ocho (8) del Círculo de Barranquilla de cada uno de los suscriptores del documento¹⁸.

- Con proveído de fecha 17 de enero de 2018 se decretó la terminación del proceso, ordenando el levantamiento de medidas cautelares y la entrega al demandante del título judicial por la suma de Setenta y Cinco Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos \$65.235.455.540. Aceptándose la renuncia de términos¹⁹.

-. Depósitos judiciales 416010003629097 por la suma de \$65.130.431,54 y 416010003633933 por la suma de \$105.024.00 entregados a Nelson Cortina el 18 de enero de 2018²⁰.

3.- El 24 de mayo de 2018 el señor Carmelo Marengo solicitó copias autenticadas del expediente del proceso ejecutivo con radicado 2017-00402 al Juzgado segundo Municipal de Soledad. La cual fue ordenada con auto de fecha 1 de junio de 2018.

4.- Como información de la nota débito de 2 de enero de 2018 del Banco Agrario por valor de \$105.024.00 No. de cuenta embargada 463242003365. Entidad ordenante de medida: juzgado segundo civil municipal, oficio 2058 expediente 0875400300220170040200 fecha de oficio 19 de diciembre de 2017 Monto embargado \$135.000.000.00²¹.

5.- Como información de la nota débito de 26 de diciembre de 2017 del Banco Agrario por valor de \$65.130.431.54.00 No. de cuenta embargada 463242003365. Entidad ordenante de medida: Juzgado Segundo Civil Municipal, oficio 2058 expediente 0875400300220170040200 fecha de oficio 19 de diciembre de 2017 Monto embargado \$135.000.000.00²².

7.- Con oficio de 28 de septiembre de 2018 el Banco Agrario dio respuesta a petición de 13 de septiembre de 2018 al señor Carmelo Marengo informado que, la medida cautelar aplicada a su cuenta de ahorro fue emitida por el Juzgado Segundo Civil Municipal se Soledad- Atlántico, embargo aplicado el 4 de abril de 2018, teniendo en cuenta el oficio de embargo No. 2058 de 19 de diciembre de 2017 por valor límite de la media de \$135.000.000.00²³.

¹⁸ Escrito suscrito por Carmelo Marengo, Nelson Cortina, Santo Acuña, con el anexo de la diligencia de reconocimiento y firma del documento por cada uno, contenido en cuatro folios. Presentación personal de las partes y del apoderado dela parte demandada.

¹⁹ Auto de terminación anexo de la demanda.

²⁰ Copia del depósito judicial con firma de receptor, como anexo de la demanda

²¹ Nota debito demandado Carmelo Marengo CC. 7.448.891, allegado como anexo de la demanda

²² Nota debito demandado Carmelo Marengo CC. 7.448.891, allegado como anexo de la demanda

²³ Documento allegado como anexo de demanda

5.2 Elementos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado

- **Hecho dañoso:**

De la narrativa de la demanda se puede inferir que el demandante señala como el hecho dañoso la decisión de 17 de enero de 2018 que ordenó la terminación del proceso con la entrega de títulos sin tener en cuenta la debida notificación del ejecutado y sin haber agotado las etapas procesales. La cual se encuentra ejecutoriada.

- **Daño antijurídico;**

El daño antijurídico, entendido como la lesión a un derecho, bien jurídico o interés legítimo que el demandante no está en el deber jurídico de soportar. La parte actora lo hace consistir en los perjuicios sufridos, como consecuencia de la entrega de dineros por la suma de \$65.235.455.54 en el proceso ejecutivo surtido en el Juzgado Segundo Municipal de Soledad, sin tener derecho a la defensa y sin surtir las etapas procesales.

- **De la imputabilidad del daño a la entidad demandada**

De la imputación, se entiende que se trata de la “*atribución de la respectiva lesión*”²⁴; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (*imputatio iure o subjetiva*) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”²⁵.

De tal manera, a continuación, se analizará armónica y coherentemente el material probatorio obrante en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del C.G.P., el cual estipula que: “*Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El Juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba*”.

²⁴ Ibidem, Sentencia 15932 del 30 de agosto de 2007.

²⁵ Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de julio 12 de 1993; Exp.7622; C.P. Carlos Betancur Jaramillo;

5.3.- Análisis Crítico De Las Pruebas Frente Al Marco Jurídico

La parte demandante en sus pretensiones solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Rama Judicial, por el daño antijurídico sufrido, con ocasión al presunto error jurisdiccional, por la decisión de terminación del proceso ejecutivo surtido en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad, en la cual se ordenó la entrega de títulos judiciales, sin la culminación de las etapas procesales.

De otra parte, la parte demandada manifiesta que, no hay una existencia de daño, por lo que no es posible que se afirme que tales providencias contengan un error jurisdiccional en virtud al desarrollo del principio de independencia y autonomía de los jueces en su interpretación que se hace de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa.

Conforme a lo aducido en el marco normativo y jurisprudencial del presente proveído, se tiene que en aquellos asuntos en que se pretenda la declaratoria de responsabilidad del Estado por daños sufridos, deben ser antijurídicos, es decir que el demandante no debe estar en la obligación de soportarlas, y que éstos sean imputables a los demandados. Por lo tanto, para que la entidad demandada resulte responsable por falla del servicio, le corresponde a la parte actora probar la concurrencia de un daño antijurídico y de la imputabilidad a la entidad estatal.

La reparación directa por error judicial impone la carga a la parte demandante de exponer de manera clara, precisa y debidamente argumentada la disconformidad de la providencia contentiva del yerro con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar, sin que con aquello llegue a ser necesario que el yerro sea invocado directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretar, a partir de una valoración integral de la demanda, si la providencia atacada es contraria a la ley y por tanto, lesiona los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del interesado²⁶.

Así las cosas, la carga de suficiencia de la parte actora se despliega frente a los dos supuestos de configuración de la responsabilidad por error judicial, estos son, el error de derecho y el de hecho, de ahí que, *v.gr.* cuando se trate del primero deberá establecer, por lo menos, un señalamiento de las normas que se considera transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas; y, por su parte, en el error de hecho

²⁶ Para la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, los yerros constitucionales deben acreditar ser “claros, ciertos, específicos y suficientes”, lo cual resulta más riguroso que en sede de reparación directa, a pesar de ser una “acción constitucional”. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.

deberá entenderse cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la ley.

Descendiendo al caso concreto, el Despacho encuentra plenamente probado la existencia de un proceso judicial ejecutivo contra el señor Carmelo Joaquín Marengo Peña, el cual se dio por terminado en razón a una solicitud realizada por las partes ante el juez de conocimiento, esto es, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad. Documento que fue acompañado de la constancia de presentación personal ante la Notaría Octava del Círculo de Barranquilla, de cada uno de los firmantes del escrito.

Se evidencia entonces que el auto cuestionado que decretó la terminación del proceso y ordenó la entrega de títulos tuvo su motivación en la solicitud suscrita por el señor Carmelo Marengo y firmada por el ejecutante y su apoderado en la que se manifestó:

(...)

- *Efectivamente soy deudor del demandante Nelson Cortina Álvarez identificado con cedula de ciudadanía No. 92.498.911 por la deuda como aparece descrita en los hechos de la demanda.*
- *Se sirva señor juez, en aras de ponerme a paz y salvo con mi obligación, ordene a quien corresponda hacer entrega de los dos (2) títulos que reposen en el proceso de la referencia. Por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$65.235.455.54).*
- *Para efectos de lo anterior manifiesto que renuncio a los términos de notificación y ejecutoria establecidos por la Ley, ordene el archivo del proceso por pago total de la obligación y en consecuencia solicito el desglose y entrega del respectivo título valor acreditado para la demanda de la referencia.*
- *Como constancia a lo acordado avala el presente acuerdo el apoderado del parte demandante Dr. Santos Acuña Ordoñez*

Como se indicó previamente, a dicho documento se le anexó la constancia de diligencia de reconocimiento de firma y contenido de documento privado de la Notaría Ocho (8) de Barranquilla. En ella se estableció que, los comparecientes fueron identificados mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre ellos el señor Carmelo Joaquín Marengo Peña identificado con cedula de ciudadanía / NUIP #0007448891. En el que declarara que la firma del documento es suya y el contenido es cierto.

Frente al mencionado documento, fundamento de la terminación decretada el 16 de enero de 2018 y el hecho de ser presentado ante el Juzgado Segundo Municipal de Soledad, por

la partes, en el libelo de la presente demanda no se hizo pronunciamiento al respecto, pues lo que se cuestiona es el actuar el Juzgado Segundo Municipal de Soledad, al señalar que la notificación personal dentro del proceso no se surtió conforme a lo previsto al artículo 291 del CGP, y que, no hubo auto de seguir adelante con la ejecución y liquidación del crédito previo a la entrega de títulos. Precizando que la diligencia de reconocimiento del pagaré del 29 de enero de 2015, no se hizo con cotejo biométrico, estando ya en vigencia el decreto 019 de 2012.

De esta manera, se observa que la parte actora se limitó a manifestar en la demanda lo que a su juicio omitió el Juez Segundo Civil Municipal de Soledad, en el curso del proceso ejecutivo, señalando como razones por las cuales la providencia objeto de discusión no tuvo fundamento, sin señalar las normas que considera transgredidas ni hacer una explicación de la manera en que ellas fueron infringidas con el auto calendado 17 de enero de 2018 que decretó la terminación anticipada del proceso, ordenando el levantamiento de medidas cautelares y la entrega al demandante del título judicial.

Al respecto, conviene recalcar que el título de imputación por error jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía e independencia que tiene el juez para interpretar los hechos que se someten a su consideración, y aplicar las normas constitucionales y legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico, de ahí que, corresponda a la parte actora demostrar que la interpretación del fallador resulta contraria al ordenamiento jurídico de forma clara y evidente, lo cual, no ocurrió en el presente asunto.

La carencia argumentativa de la parte actora, respecto del acuerdo suscrito por las partes que motivó la terminación del proceso, no permite establecer el alegado error judicial, como quiera que el artículo 461 del CGP, que dispone la terminación anticipada de los procesos ejecutivos, señala:

“Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente”.

De otra parte, como terminación anormal del proceso, se encuentra regulada la transacción (artículo 312 ibidem) y el desistimiento de las pretensiones (artículo 314 ibidem), que permiten la terminación de proceso sin la culminación de las etapas procesales.

Quiere decir lo anterior, que en cualquier etapa del proceso cuando se presente escrito proveniente del ejecutante que acredite el pago de la obligación pretendida, o escrito presentado entre las partes que acuerden el pago de la obligación y la solicitud de terminación del proceso, el juez decretará su terminación de manera anticipada.

En el proceso ejecutivo seguido por Nelson Antonio Cortina Álvarez contra el demandante Carmelo Marengo Peña, con radicado 08758-40-03-002-2017-00402-00, el Juez Segundo Civil Municipal de Soledad, ordenó la terminación del proceso, en razón a la solicitud realizada por las partes, en el cual la parte ejecutada reconoce la obligación y solicita la entrega de títulos judiciales por valor de *SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$65.235.455.54) al ejecutante*, a fin de quedar a paz y salvo con la obligación. Dando lugar a la terminación del proceso, entrega de título y levantamiento de las medidas cautelares.

Para el Despacho, de la estricta valoración de las pruebas, la decisión del Juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad, se emitió respetando el principio de autonomía de la voluntad privada de las partes, que regula el derecho civil y las prescripciones normativas aplicables al caso para la terminación anticipada del proceso ejecutivo, tomando en consideración la autenticidad del documento presentado por las partes, que contiene la manifestación de su voluntad.

Aunado a lo anterior, ante la insuficiencia argumentativa y probatoria, de la parte demandante, frente a la providencia señalada como ocasionante del daño, esto es, el auto adiado 17 de enero de 2018 que decretó la terminación anticipada del proceso, se puede concluir que no se acreditó el error jurisdiccional alegado, comoquiera que no se encontraron yerros en la emisión de la decisión en cuestión. Pues se itera, el documento allegado como fundamento de la decisión no fue cuestionado por la parte actora en el presente proceso, el cual si presentara alguna irregularidad evidente o grosera permitiría inferir que la decisión cuestionada fue expedida con un error de hecho o de derecho. En esto la jurisprudencia ha sido enfática en considerar que el error de hecho o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme, para que se configure una lesión de los derechos ya comentados, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión que, en todo caso, debe ser personal y cierta²⁷. Lo anterior, implica, además, que la tarea del juez de la responsabilidad, no deba traducirse en la reproducción de la labor del juez de instancia, pues su labor debe limitarse a la verificación de la existencia de los yerros que se endilgan a la luz de la motivación jurídica y probatoria del fallo que cuestiona, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada.

²⁷ “c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. || d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución-auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 22.322.

En esa medida al no evidenciarse irregularidades frente al documento objeto de la decisión cuestionada de error judicial, y así como en la misma providencia no es dable determinar que el daño alegado sea antijurídico y por ende sea resarcible.

En ese orden ideas, considerando que la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se predicen de una determinada providencia y, por tanto, no demostró que el auto analizado fuera contrario a derecho, fuerza denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

VI.- FALLA

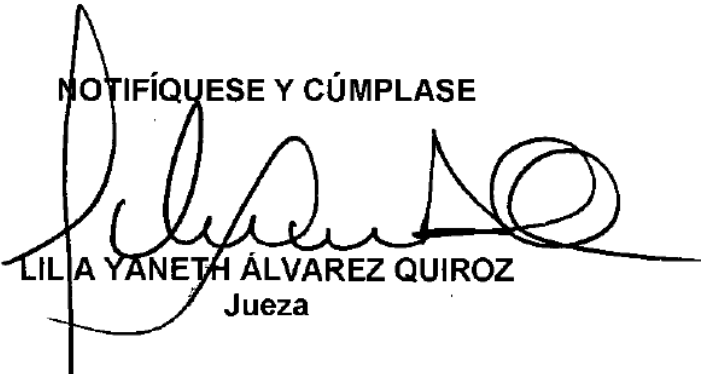
PRIMERO: DENIÉGUESE las suplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Notifíquese esta sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 203 del C.P.A. y C.A.

CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LILA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ
Jueza

KS